



Diagnóstico de la situación problemática en la población, organización o en la empresa agropecuaria rural

Breve descripción:

El análisis de la problemática en el sector agropecuario puede abordarse, según el grado de organización, en tres niveles: primero, cuando se enfoca a una población dispersa pero más o menos definida (vereda, vocación productiva, etc.), en segundo lugar, a una organización (como por ejemplo las del sector solidario) y finalmente a empresas agropecuarias propiamente dichas.

Junio 2024

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Desarrollo rural y políticas agrarias en Colombia	4
2. Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)	18
2.1. Jerarquía de las normas en Colombia	18
2.2. Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria Ley 1876 de diciembre 27 de 2017	19
2.3. Resolución 407 de octubre 30 de 2018	23
2.4. Resolución 422 de 05 de julio de 2019	29
2.5. Decreto 1319 de 01 de octubre 2020 - Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA)	33
2.6. Ley 464 de 29 de diciembre 2017 - Agricultura familiar campesina y comunitaria ACFC	35
3. Diagnóstico Rural Participativo (DRP)	37
4. Clasificación y registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria	39
Síntesis	46
Glosario	47
Material complementario	51
Referencias bibliográficas	52

Créditos55

Introducción

A partir de la implementación del punto N°01 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (2016) contemplado en el Acuerdo de La Habana, se determinaron los lineamientos para una reforma rural integral (RRI), que supone una transformación estructural del campo colombiano. En consecuencia, el gobierno nacional avanzó en la expedición del nuevo marco normativo para la atención a la ruralidad, la ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, acto que deroga la ley 607 del 2000 (norma enfocada al asistencialismo).

El SNIA pone a disposición de los actores involucrados con el desarrollo rural en Colombia los recursos y canales para la gestión del fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario de una manera integral; es decir, contemplando también, además de las capacidades técnicas individuales, las capacidades sociales (asociatividad, cooperación, economías colaborativas), el acceso y uso de los recursos tecnológicos, la compatibilidad con la sostenibilidad ambiental y las capacidades de participación política de las comunidades rurales.

En el siguiente video, se explica el aspecto introductorio de este componente:

Video 1. Diagnóstico de la situación problemática en la población, organización o en la empresa agropecuaria rural.



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Diagnóstico de la situación problemática en la población, organización o en la empresa agropecuaria rural.

Bienvenidos al componente formativo Diagnóstico de la situación problemática en la población, organización o en la empresa agropecuaria rural. En el proceso de intervención de una comunidad o territorio podemos distinguir al menos cuatro fases.

La primera fase es la diagnóstica donde se identifican los problemas junto a sus causas y consecuencias a corto, mediano y largo plazo, una segunda fase, seguida de un proceso de formulación y planeación de las acciones para solucionar o mitigar la

problemática identificada y demás requisitos para la intervención (formulación del proyecto).

Una tercera de ejecución de las actividades donde se concreta lo planteado en la formulación. Finalmente, se encuentra la cuarta fase de evaluación del proyecto, donde se revisa el cumplimiento de los objetivos y el impacto generado.

La fase de diagnóstico de cualquier proceso de planificación es un ejercicio donde los actores involucrados tienen un logro importante al contactarse directamente con la comunidad y así abrir espacios para el encuentro y el diálogo en materias de interés común. Es el primer eslabón en un proceso de planificación, razón que lo sitúa como una actividad esencial e imprescindible para generar un plan de intervención de impacto positivo, eficaz y coherente con los intereses de la población, los entes involucrados y la institucionalidad; además, un adecuado diagnóstico contribuye en gran medida a la prevención, mitigación de riesgos y amenazas al éxito del proyecto formulado.

1. Desarrollo rural y políticas agrarias en Colombia

No existe una elaboración histórica completa y sistemática sobre las políticas de reforma agraria y de tierras en Colombia. La historia de esas políticas es una tarea pendiente para la academia de ciencias sociales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Sin embargo, Catherine LeGrand presenta un trabajo destacable en 1988, un relato riguroso y con un análisis coherente con las políticas emitidas durante el período 1850-1950.

“Mariano Arango (1994) hizo uno de los mejores relatos históricos, donde combina el análisis con las principales políticas de tierras desde 1874 hasta los proyectos de ley presentados a comienzos de la administración Barco en 1987. El estudio de Kalmanovitz y López, la agricultura colombiana en el siglo XX (2006), es una buena aproximación a una historia económica de las políticas en mención durante un periodo extenso”. (CNMH, 2013).

Cuando se referencia a la problemática del campo y la ruralidad, se habla de la cuestión agraria. El tema fue ampliamente abordado en los estudios, por demás muy serios, de Jesús Antonio Bejarano Ávila (El Salado, Ibagué, Tolima, 24 de diciembre de 1946 - Bogotá 15 de septiembre de 1999), economista e historiador que profundizó en diversos temas relacionados con la historia agraria en Colombia y quien profundiza el debate académico relacionado con el desarrollo agrario. Como actor mediador en el conflicto armado durante el gobierno de Gaviria, un mes después de la muerte de Jaime Garzón, Bejarano es asesinado y su crimen aún se encuentra en la impunidad. De los principales aportes del maestro Bejarano se encuentran: “El régimen agrario; de la economía exportadora a la economía industrial y economía de poder.

La Sociedad de Agricultores de Colombia SAC y el desarrollo agropecuario colombiano (1985), donde desentraña temas centrales en sus investigaciones, como la “transición de la economía preindustrial a una industrial en Colombia” y el segundo relacionado a uno de los ejes donde se ha articulado la política agraria y los poderes relacionados con la cuestión agraria en Colombia, el gremio de la SAC. El legado del maestro Bejarano es esencial para comprender la historia de la cuestión agraria.

“En el régimen agrario parte de la premisa de que la transición hacia la economía industrial supone unas relaciones con el exterior diferentes de las que existían hasta los años treinta, cuando el desarrollo colombiano era inducido en lo fundamental por impulsos exteriores "que al ser recogidos por el sector exportador se encargan de ordenar las relaciones económicas internas". (Machado, 1997, p. 241).

De esta manera, se puede decir que antes de 1930, punto de inflexión de la economía capitalista mundial (crisis de 1929, conocida como “La gran depresión”), la dinámica económica en Colombia se encontraba impulsada casi totalmente desde el exterior. Con fines prácticos, siguiendo el esquema de las políticas agrarias propuesto por Mariano Arango Restrepo, escritor pionero en la literatura de la economía agrícola, se puede denominar a los años anteriores de la década de los años treinta como “colonización premoderna”.

Como **primer período** de análisis (1874-1923) Jesús Bejarano plantea que a diferencia de las premisas marxistas (postulados de gran aceptación en la comunidad académica), en las tres últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX en Colombia se genera, “un proceso de apropiación de la tierra, de formación de la gran propiedad territorial que no conlleva, con la misma intensidad, un proceso de expropiación en cuanto se apoya fundamentalmente sobre la expansión de la frontera agrícola y no

sobre la expropiación de los pequeños productores". Se trata entonces de un proceso en el que se forma una capa de pequeños productores paralela a la gran propiedad rural. (Machado, 1997, p. 241).

Bejarano concluye que la gran peculiaridad de todo este proceso del caso colombiano es la apertura del mercado interior, no a través de la formación de una clase trabajadora asalariada, sino por el surgimiento y consolidación de los productores cafeteros basados en la pequeña propiedad. La industrialización, por ende, se ve obstaculizada para penetrar al campo (Machado, 1997). Esta época está marcada por cientos de confrontaciones y una aguda violencia entre colonos y terratenientes.

En vista de este obstáculo, la “revolución en marcha” de López Pumarejo (presidente de Colombia 1934-1938 y 1942-1945) logra generar las condiciones para la industrialización del campo sin realizar una reforma agraria redistributiva, que era la demanda del movimiento campesino entonces como ahora las reformas son bien conocidas y básicamente tratan dos puntos: el impulso para el uso productivo de las tierras y la formalización de terrenos baldíos y el fomento de las actividades agropecuarias a través de préstamos y acceso a tierras por contrato.

Esta reforma, aunque importante, para nada mejora las condiciones de pobreza en el campo, ni genera el impacto esperado en el desarrollo rural. Se puede decir que del régimen agrario se pasa a un régimen territorial, donde el papel principal es ahora de los terratenientes, grandes inversionistas del agro y comerciantes, principalmente de café, banano y caña de azúcar.

A la par de los fenómenos que conllevan la concentración de la tierra que no se logra frenar y las relaciones sociales que de ello se desprenden, se evidencia una creciente pauperización de la mano de obra agraria, la apropiación de terrenos baldíos para generación de valor por especulación y no para la productividad de la tierra.

La agudización de los conflictos entre los partidos recién institucionalizados (liberal y conservador) se suma a los conflictos por la posesión de tierras y retroalimenta una crisis que acosa la ruralidad desde el siglo XIX y que aún se encuentra vigente respecto a la tenencia de la tierra y el acceso a los factores productivos. Este primer lapsus del desarrollo agrario en Colombia, se caracteriza pues, por el fomento a la colonización mediante la adjudicación de baldíos, más bien al final de un período con guerras civiles políticas y una guerra con tintes sociales que fue la guerra de los mil días. (Arango, 1987).

El **segundo período**: se puede identificar entre 1924 y 1936, y se puede denominar **“Conflicto agrario”**, caracterizado por las medidas sobre tenencia de la tierra, aunque no se aplicaron sino hasta más adelante en el tiempo, fueron muy importantes, como la Ley 74 de 1926 acerca de la parcelación de grandes predios de arrendatarios. La adjudicación de baldíos se hace más exigente y se forman gremios agrarios muy importantes. En esta época se lleva a cabo una gran inversión en infraestructura de obras públicas, lo que absorbe parte de la mano de obra encareciendo la subsistencia y los jornales, desencadenando la insurgencia de arrendatarios sobre todo en Cundinamarca y Tolima.

Después de la gran depresión de 1929, al regresar los trabajadores de las obras públicas al campo, los conflictos agrarios se agudizan, muchas tierras regresan al estado y grandes haciendas se parcelaron por acción legislativa y judicial. Debido a las dificultades del gobierno al verificar la identificación de verdaderos propietarios de las tierras, se empiezan a exigir los títulos de traspaso del estado a los propietarios (sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1926) y se dificulta el acceso al crédito

por esta exigencia. Lo anterior permitió la reversión al estado de muchas tierras donde había conflictos. (Arango, 1987).

El **tercer período:** abarca desde la emisión de la ley 200 de 1936 hasta la Segunda Guerra Mundial. Asciende Alfonso López Pumarejo a la presidencia de la República, que con una actitud de respuesta a las demandas sociales orientadas por principios liberales no emite leyes de manera inmediata, pero aplica las existentes para la parcelación de varias haciendas como la “Tolima”.

Dos años después empieza a legislar para cambiar efectos negativos de leyes anteriores, permitiendo legalizar títulos de propiedad dudosos y de colonos de “buena fe” y procurando un mayor uso productivo de las tierras, causando, con estas acciones legislativas, exactamente efectos contrarios, regresivos por cuanto, al suprimirse la exigencia de 1926 del título original de adjudicación del estado, permitió la legalización de gigantes proporciones de tierra a los terratenientes.

La idea del gobierno de Pumarejo, en palabras de su ministro Darío Echandía, era transformar el latifundio ocioso en empresa capitalista, esto se pretendía lograr dando un periodo de 10 años para la explotación de la tierra, pero al no reglamentar la subutilización de esta y aceptar la ganadería extensiva e incluso la silvicultura como actividades válidas, las intenciones liberales del gobierno Pumarejo catalizan la concentración de la tierra y del capital, transformando las tierras agrícolas y ganaderas con el consiguiente desplazamiento forzoso de aparceros y colonos. (Arango, 1987).

El **cuarto período:** abarca desde la segunda guerra mundial en 1940 al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Esta época se caracteriza por los efectos del primer intento de reforma agraria del gobierno Pumarejo, de las políticas de Eduardo Santos y de un segundo período de Pumarejo.

A escala mundial por una guerra de proporciones inimaginables (con la consecuente restricción de importaciones y la acumulación de divisas), que es el trasfondo internacional del surgimiento de movimientos armados a partir de movimientos campesinos radicalizados y organizaciones políticas agitadas, lo que da origen al conflicto armado. En este período un fenómeno marca la historia de Colombia, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (causando un estallido social denominado el bogotazo), que dará los insumos para el inicio en el siguiente período, de una nueva ola de violencia, colonización de tierras y políticas fiscales. La ley 74 de 1926 se empieza aplicar en 1938 en Tena, Cundinamarca, para parcelar la hacienda “Chitaque” en la que sus propietarios se negaban a hacerlo.

Las medidas proteccionistas del gobierno Santos (sustitución) frente a las importaciones se ven reversadas en la posguerra, pues la producción interna no fue suficiente, disparando los precios de los alimentos hacia 1943, donde se tuvieron que controlar, pero esta medida no funcionó al no abarcar los productos agrícolas básicos; este control se derogó en 1945. En este período hay déficit de alimentos por efecto de la desaparición de la aparcería y el rápido crecimiento industrial. Se expide en el segundo gobierno Pumarejo la ley 100 de 1944, que intentando restablecer la aparcería en Colombia fue en contravía de la anterior ley 200, al ampliar el tiempo para restitución de la tierra al estado de 10 a 15 años, un nuevo desacierto, pero que ayuda a los cafeteros, que se recuperan hacia 1952.

Se creo el Fondo Nacional del Café para almacenar lo que no se vendía al mercado norteamericano, pues el europeo estaba cerrado debido a la reconstrucción por la guerra. Muchos alimentos se encarecieron por esto, pero se lograron contener en cierto grado las alzas con algunas importaciones. (Arango, 1987).

El **quinto período**: colonización, política fiscal y violencia. Desde 1949 a 1960 es una época de mucha actividad de la Federación Nacional de Cafeteros, que pasa de fomentar la parcelación de haciendas en el período anterior, a fomentar la colonización e impulsar la aparcería en este nuevo período. El gobierno de Mariano Ospina Pérez estableció el Instituto de Parcelación, Colonización y Defensa Forestal, en 1949: compraron y parcelaron haciendas, pero se adjudicaron de manera sesgada a miembros del partido conservador.

En 1954, la dictadura militar organizó colonizaciones, pero esta inversión, por demás muy grande, se perdió por el fracaso del proceso en menos de dos años. A la legislación impuesta hasta el momento, se suma la carga tributaria de la tierra. En 1954 la burguesía vallecaucana fundó la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) con un impuesto adicional al predial.

La junta militar expidió el decreto 290 de 1957 que obligaba a los dueños de las tierras mecanizarles un uso del 100 % y a los dueños de las tierras cultivables en un 15 % como mínimo, so pena de ver quintuplicado el impuesto predial en diez años, este era del 2 %. Luego la medida se restringe a 10.000 de hectáreas. en cuatro regiones de Colombia, esto acompañado de estímulos y exenciones a los empresarios agrícolas. La dictadura cedió y surge el frente nacional, que continúa la propuesta de tributación de la tierra, lo que atemoriza a los terratenientes y los mueve hacia la reforma agraria.

Los cuales iniciaron un período de violencia que desplaza a los campesinos hacia las urbes y tierra planas del Valle y el Tolima, acabando con casi 400 mil fincas, la mayoría en zonas de ladera. Una segunda fase de la violencia entre 1954 y 1962 causa un detrimento en el valor de la renta y el salario real. (Arango, 1987).

El **sexto período:** corresponde al reformismo agrario, de la ley 135 de 1961 al acuerdo de Chicoral (1972). Se generan las condiciones, por diversos factores entre los que se destacan un temor a impuestos sobre la tierra y el avance de movimientos revolucionarios en Cuba y otros países, la presión de Estados Unidos y el avance electoral del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). La Ley 135 pretende una reforma en la tenencia de la tierra, fomentar la producción, mejorar las condiciones de vida y el grado de organización de los campesinos y conservar recursos naturales. Esta ley y los demás intentos de reforma agraria en Colombia han sido de efectos escasos, apenas con logros en colonización y alguna incidencia leve en la tenencia de la tierra.

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), institución encargada de ejecutar la ley 135, invierte la mayoría de sus recursos en distritos de riego que concentran el beneficio económico en términos de tierra adquirida unas 10 veces más en estas áreas, que, en el resto del país, debido al costo de los distritos. La agricultura a gran escala se intensifica. Finalmente, la reforma surte efecto en un favorecimiento de medianos y grandes propietarios. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) la reforma prácticamente no avanzó, hasta la posesión de Carlos Lleras Restrepo, quien impulsa la reforma y crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC. (Arango, 1987).

El **séptimo período:** el DRI (1970) y el desmonte de la reforma agraria (1973-1983). En 1972, producto de una iniciativa del frente nacional, contrareformista, en reacción a los avances del INCORA, por cierto, muy lentos, surge el pacto de Chicoral, que con la promesa de legalización impulsa de nuevo la colonización a través de una titulación de baldíos, abandonando después a su suerte a los colonos que avanzaron hacia la Amazonía, el litoral Pacífico, el Darién y el piedemonte araucano. Se crea el

Fondo de Desarrollo Rural (DRI) como alternativa a la reforma agraria, intensificando la producción a partir de los avances generados de la revolución verde. El presidente Virgilio Barco, en 1986, se abandera de la reforma agraria en su programa y promulga la ley 30 de 1986. (Arango, 1987).

El análisis del desarrollo rural desde las políticas agrarias, después de Arango en 1987, se puede abordar desde la perspectiva de Absalón Machado, una de las autoridades académicas más sobresalientes sobre el tema agrario en Colombia.

El **octavo período**: reactivación temporal de la reforma agraria (1988-1994). El presidente Betancur organizó una comisión de diálogo nacional para mermar la violencia y una subcomisión agraria conformada por distintos gremios y organizaciones, incluso los grupos armados, donde se establece un acuerdo de reforma agraria, pero este no tuvo el consenso del campesinado y no logra aprobarse sino hasta la presidencia de Barco a través de la ley 30 de 1988. Básicamente, al igual que otros mecanismos como el acuerdo de Chicoral, se define en estas normas los criterios para calificar los predios como adecuadamente o no explotados y los parámetros para, por ejemplo, expropiar para la reforma, hasta ahora estos puntos declarados inexequibles por el Consejo de Estado.

La ley 30, al fin aplica una norma de función social de la propiedad y todo predio rural es susceptible, aquí, de ser parte de la reforma. Con esta ley también se introducen elementos modernizadores como el fortalecimiento del Fondo Nacional Agrario (FNA), se crea un fondo de capacitación y el Fondo Nacional de Adecuación de tierras, centros de arrendamiento de maquinaria agrícola, se facilitan las negociaciones de predios para su adquisición, programas regionales de reforma, entre otros

mecanismos políticos para la mejora de la productividad y equidad en la ruralidad.

(Machado, 2009).

Como resalta Machado del discurso del presidente Virgilio Barco en el acto de sanción de la Ley 30 de 1988:

“La importancia que el gobierno de Barco le dio a la recuperación de la reforma agraria quedó expresada en su afirmación contundente de que era en sí misma - una terapia para la reconciliación nacional y social y el mecanismo más eficaz para integrar a la vida política, social y económica a los colombianos marginados de las áreas rurales”.

(Machado, 2009, p. 163).

Noveno período: el quiebre definitivo de la reforma denominado el mercado de tierras (1995 a 1999). La globalización de la economía con la consiguiente apertura de mercados, la nueva constitución de 1991, las intenciones de modernización del estado (la aplicación de las políticas neoliberales producto de la receta del consenso de Washington en los años 80), la agudización del conflicto, el narcoparamilitarismo, el despojo de tierras, la violación de derechos humanos, las acciones guerrilleras, el asesinato sistemático de la Unión Patriótica, la crisis económica (1998-2001), la incidencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los intentos de acuerdos de paz, son, entre otros, los hechos del contexto en los intentos de reforma agraria hasta el cambio de siglo.

El Estado colombiano, liderado por César Gaviria, se retira del proceso directo de redistribución de tierra que sólo llevaba dos años operando bajo la Ley 30. Se deja bajo las leyes del mercado el intercambio de tierras, con la apertura de líneas de crédito subsidiadas (Ley 160 de 1994). En los 90 hubo una gran intervención a través de los proyectos PNUD-FAO, que dio origen a la ley 160.

En este período vuelve a concentrarse la tierra a los niveles anteriores a Barco, por efecto sinérgico de todos los factores mencionados anteriormente. Como consecuencia de ello, nadie quería comprar tierras a pesar de las facilidades para las transacciones orientadas desde el estado, el fracaso de esta política es rotundo, pues se pensó para un país sin violencia; es decir, para otro país. El Ministerio de Agricultura se dedicó al fortalecimiento de las cadenas productivas más que a la redistribución de la propiedad. (Machado, 2009).

Décimo período: la política de atención a los desplazados por la violencia (década del 2000). El contundente fracaso de la política neoliberal del mercado de tierras de Gaviria, el creciente reclamo de los desplazados y los organismos defensores de DDHH, la conquista de los espacios de poder por parte de los “señores de la guerra” y grandes terratenientes en articulación con parte de la institucionalidad del país, en palabras de Absalón Machado, la opinión de ciertos gremios acerca de la obsolescencia de la reforma agraria frente a los nuevos desafíos de la apertura de mercados (globalización), generan una respuesta de parte del Estado, enfocada a la atención de la población desplazada por la violencia hacia las urbes y que constituyen una gran crisis humanitaria a finales del siglo XX.

Esta concentración de esfuerzos hacia la población desplazada atacando consecuencias más no las raíces, hace que se desatienda la ruralidad de manera prioritaria en cuanto a la reforma y el problema agrario en general, aunque sean las propias causas originadoras del conflicto: el mercado de tierras dominado por el narcotráfico y el apoyo paramilitar, el dominio de los demás actores armados sobre tierras y recursos, la concentración, una vez más y como constante a lo largo de casi dos siglos, de la tierra en manos de una proporción cada vez menor de propietarios, la

pobreza y despojo, incluso de los valores y dignidad del campesinado, la judicialización de los campesinos productores de coca al verse presionados por la falta de oportunidades laborales y productivas y los grupos armados, la ausencia del Estado en la periferia rural, la parapolítica (alianza entre políticos y paramilitares para el control de los territorios y las entidades públicas), la carencia de programas efectivos para el desarrollo rural y la inequidad de las políticas de desarrollo entre otras de carácter histórico y socio-cultural. (Machado, 2009).

Las iniciativas para la atención integral de los desplazados por el conflicto armado pueden resumirse en La Ley 387 de 1997 y el Decreto 2562 del 2000, creándose el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y un Consejo Nacional para los temas de políticas y recursos. En cuanto al tema específico de tierras, el Decreto 2007 de 2001 reglamenta la atención oportuna para el retorno voluntario a su lugar de origen. Otras referencias normativas son: CONPES 3057 de 1999, Sentencia SU1150 de 2002, Ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz), la normativa relativa a la extinción de dominio de tierras susceptibles de adjudicación también cobra mucha importancia.

A pesar de la amplia documentación académica, de sentencias judiciales y testimonios de las víctimas y declaraciones de la contraloría, defensoría del pueblo, etc., los documentos públicos no son explícitos en el reconocimiento de un conflicto interno, por tanto, de la relación entre la tenencia de la tierra y el conflicto. (Machado, 2009).

Decimoprimer período: de la atención humanitaria de los desplazados a la reparación de las víctimas del conflicto interno (del 2011 a la actualidad). Con la

aplicación de la controvertida Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la atención a la ruralidad se continúa ejerciendo desde la mitigación de los efectos del conflicto.

Mientras se opera, con muchas dificultades la ley mencionada, con una clara intención de reparar las víctimas del conflicto y a raíz de la ineficacia del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), la liquidación del fondo DRI, la terminación del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), los ajustes y reducciones del gasto público y en general de lineamientos políticos, el gobierno de Uribe Vélez reestructura el sector agropecuario con la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) mediante el Decreto Ley 1300 de 2003 y posteriormente liquidado en 2015, consecuentemente con la política de mercado de tierras y reducción de las políticas de desarrollo rural.

Este instituto, al ser la combinación de otros cuatro, fue un fracaso debido a la inoperancia, falta de estructura orgánica, claridad del desarrollo rural, la corrupción, la parapolítica y la escasa credibilidad entre la ciudadanía, en especial la rural. Un proyecto de ley se lanza para reestructurar totalmente la legislación agraria (Proyecto de Ley 30 de 2006), del cual, según expresa Machado, varios analistas coinciden en que deja espacios abiertos para la legalización de tierras ilegalmente apropiadas por paramilitares, narcotraficantes y otros actores sociales (art.155), en argucia de que la Ley 200 de 1936 ya lo dictaminado, efectivamente sirviendo este argumento para posiblemente legalizar hechos de apropiación punibles por cuanto sean tierras de campesinos desplazados. (Machado, 2009).

Frente al tema de la reforma agraria, de manera general, Machado deja ver que hubo dos momentos en la historia de Colombia, donde debió resolverse el problema o al menos iniciado su resolución: En la transición de premodernidad (colonización) a

modernidad y en los inicios de la modernización (1945-1960), donde también surgen los grupos armados organizados reclamando una solución al problema de tierras.

Afirma que en el inicio del Frente Nacional estaban dadas las condiciones necesarias para realizar con éxito una reforma agraria y que, en otros momentos, según Albert Berry (2002), como en los años 30, en 1961 con la Ley 135 y en la constitución de 1991, también fueron clave, por lo cual pudieron haber sido decisivos para una reforma agraria que reclama la ruralidad desde el siglo XIX.

Cabe mencionar que el mismo Machado en el año 2000, en su “Agrarismo y ruralidad”, recalca que una reforma redistributiva radical no es viable económicamente pues un pequeño productor no puede defenderse solo en el contexto de la globalización de la economía y la mundialización de la cultura. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

A partir del acuerdo de La Habana (2016), se abre una nueva oportunidad para el desarrollo rural, que de hecho enfrenta retos más grandes y complejos, pero que debe asumir de la mano del estado colombiano, las instituciones, los gobiernos y el sector privado, aprovechando la sinergia de los distintos actores que ofertan los mecanismos, herramientas y servicios de atención a la ruralidad, donde también se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como un actor importante en el fortalecimiento de capacidades integrales y en la gestión del desarrollo rural a partir del ejercicio de la extensión rural (agropecuaria), la formación para el trabajo, la empleabilidad, la gestión de proyectos, el fortalecimiento de la empresa agropecuaria y agroindustrial, entre otras acciones conjuntas con distintas entidades públicas y privadas, aprovechando el marco que ofrece el nuevo Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (2017) y sus subsistemas.

2. Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)

La Ley 1876 de diciembre 27 de 2017 Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria se crea con el fin de dar respuesta al primer punto del acuerdo de paz y derogar la Ley 607 de 2000 que creó las Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y reglamentó la asistencia técnica directa rural; en esta normativa se establecen los criterios para la creación, articulación y puesta en marcha de tres subsistemas, además, de su respectiva reglamentación mediante decretos, resoluciones y ordenanzas.

A continuación, se brindará una explicación breve de la jerarquía de las normas, la aplicación de la Ley 1876 de 2017 (SNIA) y normas reglamentarias para la formulación de proyectos agropecuarios.

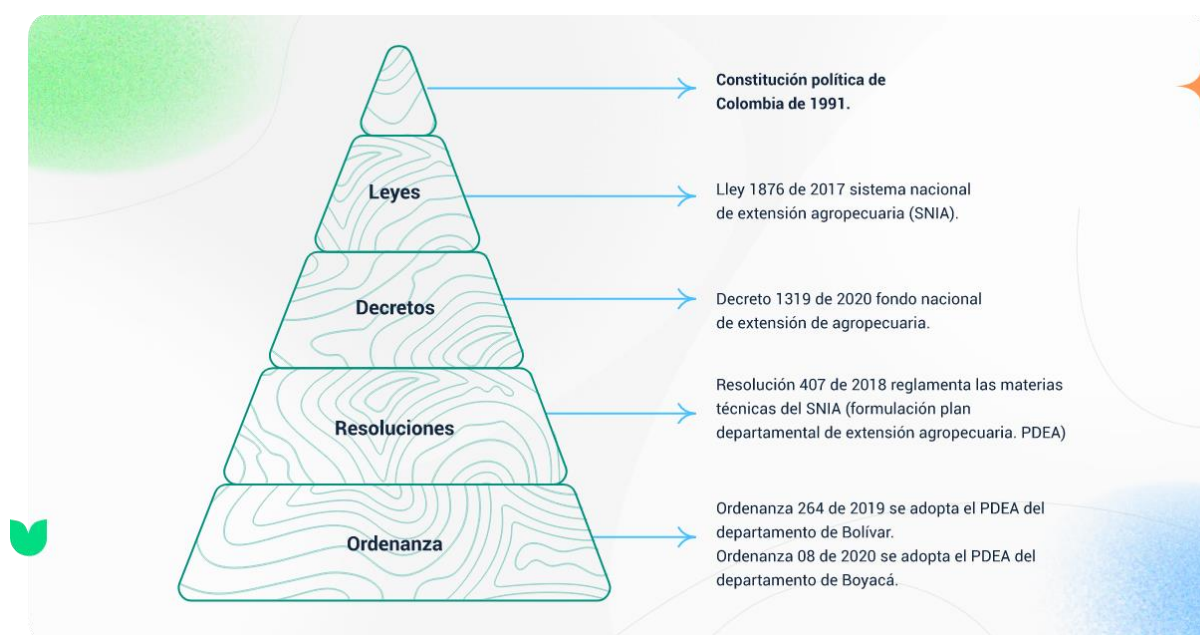
2.1. Jerarquía de las normas en Colombia

En el estado colombiano las normas se encuentran jerarquizadas, “no tienen todas el mismo nivel, ni la misma categoría, ni la misma importancia. Se encuentran jerarquizadas, según su mayor o menor grado de generalidad en consecuencia las normas superiores pueden modificar o derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben respetar el contenido de las normas superiores.”

- ✓ **Norma constitucional:** ocupa dentro del ordenamiento jurídico el rango más elevado, es la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico.
- ✓ **Ley:** norma general y abstracta que en su creación debe tener en cuenta la norma constitucional y que es creada según los preceptos establecidos en las normas constitucionales.

- ✓ **Reglamento:** norma jurídica que busca hacer posible que la ley se cumpla para que no quede en el papel, y detallar las leyes en su contenido para adaptarlas al medio económico, político y social que regula. Ejemplo: decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, sentencias, actos jurídicos de derecho privado, etc. (Sierra, 1988).

Figura 1. Jerarquía de las normas en Colombia.



Nota. Elaboración propia. Normatividad del sector agropecuario en Colombia

2.2. Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria Ley 1876 de diciembre 27 de 2017

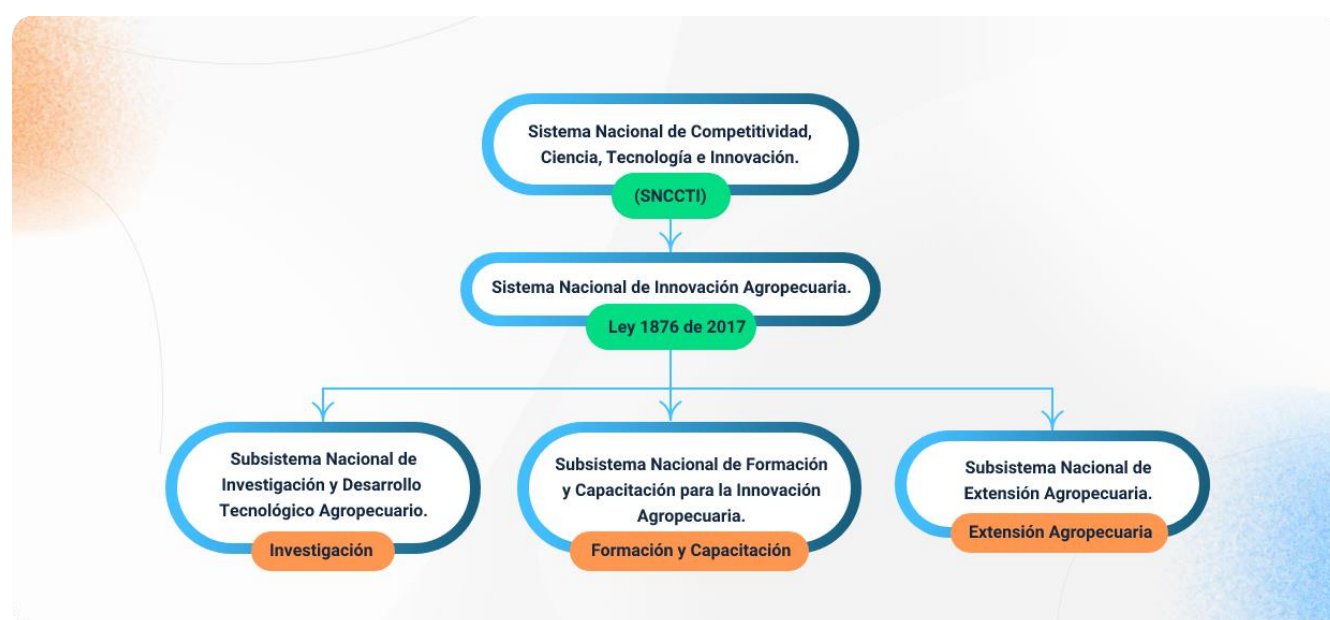
La Ley 1876 de diciembre 27 de 2017 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, se establece con el objeto de crear y poner en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), compuesto por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para su implementación, así como mecanismos para su financiación,

seguimiento y evaluación; además crea nuevas funciones, competencias y mecanismos de articulación de las entidades y organismos de coordinación del orden nacional y territorial que componen el SNIA y crea el servicio público de extensión agropecuaria y normas para su prestación. (Diciembre 27 de 2017 DO N° 50.461).

La Ley 1876 de 2017 se crea en el artículo 4 del SNIA, como un subsistema del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR); el SNIA está integrado por tres subsistemas:

1. Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario.
2. Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.
3. Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación agropecuaria.

Figura 2. Estructura del SNIA.



Nota. Elaboración propia.

En la formulación de proyectos productivos agropecuarios se debe tener en cuenta las orientaciones que en materia de normatividad existente en el país, la Ley 1876 de 2017 Diciembre 27 de 2017 DO N° 50.461 es el marco normativo que guía la política agraria en Colombia; en el Título III, artículo 24 define la extensión agropecuaria como un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral.

La norma establece cinco aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de prestar el servicio de extensión agropecuaria, como son:

1. Desarrollo de capacidades humanas integrales.
2. Desarrollo de capacidades sociales integrales y fortalecimiento a la asociatividad.
3. Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo de las tecnologías y productos tecnológicos.
4. Gestión sostenible de los recursos naturales.
5. Desarrollo de habilidades para la participación de los productores en espacios de política pública.

Al mismo tiempo estos aspectos hacen parte de la herramienta de registro y clasificación de usuarios en la que se debe registrar a los productores para poder ser beneficiarios de los proyectos agropecuarios que sean gestionados en el municipio.

En el proceso de extensión agropecuaria los profesionales del sector deben realizar el acompañamiento a productores según el grado de organización, si son población dispersa pero definida por un territorio (vereda) o línea productiva (ganadera, agrícola, agroindustrial); si hacen parte de una organización comunitaria (asociación, cooperativa, etc.) o si tienen una empresa agropecuaria rural. En este acompañamiento el extensionista fortalece, capacita y acompaña a la organización en temas normativos para ello debe tener en cuenta el PDEA que en el artículo 29 lo define como el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria el cual es el instrumento de planificación cuatrienal en cada departamento, que, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, definirá los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión. En este mismo artículo 29 se hace referencia a los elementos mínimos que debe tener el PDEA (Congreso de Colombia, 2017):

1. Líneas productivas priorizadas a atender mediante los servicios de extensión agropecuaria, sus limitantes y requerimientos.
2. Población objeto del servicio caracterizada respecto a sus condiciones socioeconómicas, culturales y productivas.
3. Estrategias y actividades requeridas para dar solución a las problemáticas y/o potenciar los sistemas productivos, el capital social, el capital humano, y la gestión de los recursos naturales, con sus respectivos cronogramas de ejecución.
4. Los objetivos, indicadores y metas en términos de productividad, competitividad y generación de ingresos.
5. La planificación financiera y de gastos asociados a la prestación del servicio.

6. Programas y proyectos regionales para la generación de capacidades, acceso a mercados y provisión de bienes, servicios e infraestructura sectorial, con los cuales deba articularse el servicio de extensión agropecuaria.
7. Las acciones regionales de manejo sostenible de los recursos naturales, de gestión del riesgo agroclimático y de adaptación al cambio climático.
8. Los sistemas territoriales de innovación, alianzas interinstitucionales, redes e iniciativas orientadas a la innovación agropecuaria regional, que deban ser articuladas con el servicio público de extensión agropecuaria.
9. La articulación con los planes y programas de prestación de servicios de extensión o asistencia técnica agropecuaria adelantados con recursos de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros. En el caso que el PDEA incluya productores ya beneficiados por la parafiscalidad agropecuaria, en la definición de la tarifa del servicio no se tendrá en cuenta el aporte correspondiente.
10. Programas y proyectos para mejorar y/o mantener el estatus sanitario, fitosanitario y de inocuidad en la producción agropecuaria.
11. Desarrollo y uso de nuevas tecnologías para la información y la comunicación TIC para impulsar, apoyar y/o soportar los distintos procesos de gestión de conocimiento que hacen parte de la extensión agropecuaria.

2.3. Resolución 407 de octubre 30 de 2018

La Resolución 407 de 2018 en el Capítulo IV artículo 4.2 adopta los lineamientos para los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria que a continuación se describen:

El PDEA como instrumento de planificación del subsistema de extensión agropecuaria. En la formulación se debe tener en cuenta documentos como el Plan

Estratégico de Ciencia Tecnología para el Sector Agropecuario (PECTIA), planes y acuerdos estratégicos, agendas integradas de competitividad, planes de desarrollo municipal, plan agropecuario municipal y departamental, Planes de Acción para la Transformación del Regional (PART), Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), esquemas y planes de ordenamiento territorial vigentes, zonas de protección nacional, regional, local; aptitud y vocación de uso generados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA); Estudio general de suelos para los departamentos; Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas (POMCA); datos del censo nacional agropecuario 2014.

Figura 3. Actores en el marco de formulación de los PDEA.



Nota. Secretarías de Cadenas Pecuarias Ministerio de Agricultura.

Participación de los actores en la formulación del PDEA

En la etapa de formulación participan los municipios y distritos, realizando el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) que son los espacios de diálogo y concertación de las necesidades e iniciativas en materia de extensión agropecuaria; entre los actores que deben tener representación están las comunidades étnicas, las mujeres, los jóvenes y cualquier otra población.

Formulación cuatrienal del PDEA

Solo se debe formular para un periodo no mayor de cuatro años en los cuales las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria prestarán el servicio a partir de las orientaciones del PDEA.

Proceso de formulación del PDEA:

- **Preparación:** en esta etapa los equipos formadores de las secretarías de agricultura departamental y con el acompañamiento técnico de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), determinan los tiempos, movimientos recursos, mecanismos de coordinación con los municipios y demás actores del SNIA para la puesta en marcha del proceso.
- **Diagnóstico:** esta fase debe tener en cuenta tres consideraciones:
 - Primero:** revisión de la información secundaria, establecer las capacidades del territorio, tipos de cadenas productivas importantes, características demográficas y los instrumentos de planificación para el sector agropecuario.
 - Segundo:** identificación de principales problemas o retos cómo operan las cadenas productivas sus principales problemas o retos, etc.

Tercero: por último, caracterización de los usuarios, que es el levantamiento de la información primaria con la que se clasifica a los productores por niveles según los criterios de gradualidad establecidos por el MADR en el instrumento de registro y clasificación de usuarios.

- **Análisis:** se realiza el estudio de la información primaria y secundaria con el fin de establecer, en un primer lugar la composición socio productiva, segundo identificar las principales problemáticas, retos y brechas en extensión agropecuaria, tercero la población sujeta del servicio respecto a sus condiciones socioeconómicas, culturales y productivas y en cuarto lugar las características de los mercados en los que se mueven los productos agrícolas.
- **Identificación:** es la base en la cual se concretarán los programas de extensión agropecuaria del PDEA, los cuales deben incluir líneas de acción, ejes temáticos, estrategias, actividades, objetivos, indicadores, las metas a alcanzar y el cronograma. Luego desde los municipios y distritos se deben formular y ejecutar proyectos de extensión agropecuaria, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los programas de extensión agropecuaria del PDEA.
- **Divulgación del PDEA:** al finalizar el proceso de formulación del PDEA, pasa a sanción de la Asamblea Departamental quien mediante ordenanza los aprueba y pasa a divulgarse a los actores del SNIA a través de medios electrónicos y/o físicos.

Figura 4. Enfoque de extensión agropecuaria desglosado en los cinco aspectos y sus respectivos componentes.



Nota. Secretarios de Cadenas Pecuarias Ministerio de Agricultura.

Se amplía la información de los aspectos del enfoque PDEA.

Desarrollo de capacidades humanas-técnicas:

- Identificación de la actividad productiva principal.
- Identificación de actividades productivas secundarias.
- Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo.
- Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias.
- Estructuras de comercialización de los productos.
- Mercados.
- Valor agregado en los procesos de producción.
- Tipo mano de obra empleada.

- Acceso a crédito y bancarización.

Desarrollo de capacidades sociales:

- Vinculación a algún tipo de organización.
- Realización de actividades productivas de manera colectiva.
- Procesos de emprendimiento y asociatividad.
- Participación en alianzas comerciales.
- Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo.
- Uso de sellos de calidad y certificaciones.
- Conocimiento sobre propiedad intelectual.

Acceso a la información y uso de las TIC:

- Acceso a fuentes de información.
- Acceso a las TIC.
- Uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones.
- Habilidades y competencias en el uso de TIC.
- Apropiación social del conocimiento tradicional y científico.

Sostenibilidad ambiental:

- Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad.
- Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables.
- Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.
- Cumplimiento de normatividad ambiental.

Habilidades para la participación política en instancias para tal fin:

- Conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación.
- Conocimiento sobre herramientas para la participación.
- Ejercicio de control político y social.
- Fomento de la autogestión de las comunidades.

2.4. Resolución 422 de 05 de julio de 2019

Mediante esta resolución se reglamenta el artículo 33 de la Ley 1876 de 2017; tiene por objeto reglamentar la relación con el procedimiento y los requisitos de habilitación de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) para la elaboración, publicación y actualización del registro de EPSEA habilitadas para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes:

Requisitos de habilitación de Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión

Agropecuaria (EPSEA): las entidades que pueden inscribirse en el registro de EPSEA son las que se encuentran en el artículo 32 de la ley 1876 de 2017 y que acrediten los requisitos del artículo 33 de la misma Ley. Las entidades que deseen constituirse como EPSEA deben tener un equipo mínimo con los siguientes perfiles:

Director: un (1) profesional titulado en alguna de las siguientes profesiones: administración; economía; contaduría pública; agronomía; biología, microbiología y afines; ingeniería agrícola, forestal y afines; ingeniería agroindustrial, alimentos y afines; ingeniería agronómica, pecuaria y afines; medicina veterinaria; zootecnia; ingeniería administrativa y afines; ingeniería industrial y afines; antropología, artes liberales; sociología, trabajo social y afines; derecho; con tarjeta profesional vigente.

Coordinador de proyectos agropecuarios: un (1) profesional titulado en alguna de las siguientes profesiones: agronomía; biología, microbiología y afines; ingeniería agrícola, forestal y afines; administración; economía; ingeniería agroindustrial, alimentos y afines; ingeniería agronómica, pecuaria y afines; medicina veterinaria; zootecnia, con tarjeta profesional vigente.

Coordinador administrativo y financiero: un (1) profesional titulado en alguna de las siguientes profesiones: administración; economía; contaduría pública; ingeniería industrial y afines con tarjeta profesional vigente.

Coordinador de procesos asociativos y comerciales: un (1) profesional titulado en alguna de las siguientes profesiones: administración; economía; ingeniería administrativa y afines; ingeniería industrial y afines; antropología, artes liberales; sociología, trabajo social y afines con tarjeta profesional vigente.

Coordinador ambiental: un (1) profesional titulado en alguna de las siguientes profesiones: ingeniería ambiental, sanitaria y afines; ingeniería civil y afines; geología, otros programas de ciencias naturales; administración; ingeniería agrícola, forestal y afines; biología, microbiología y afines, con tarjeta profesional vigente.

Asesor jurídico: un (1) profesional titulado en derecho, con tarjeta profesional vigente, con título de posgrado en alguno de los siguientes niveles de formación: especialización universitaria; maestría; doctorado.

Capacidades para ejecutar los PDEA: son las capacidades humanas, técnico productivas, de mercadeo y comercialización, así como las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, desarrollo empresarial, innovación, investigación y uso de las TIC, gestión sostenible de recursos naturales y desarrollo de

habilidades para la participación de los productores en la política pública sectorial, con que debe contar la entidad que pretende habilitarse como EPSEA.

Vínculo comprobable con organizaciones de formación, capacitación, ciencia, tecnología e innovación: en este ítem las entidades deben demostrar, mediante documento idóneo, que cuentan con vínculos vigentes, tales como contratos, convenios, alianzas y/o acuerdos, con entidades de educación, de formación y/o de capacitación en el sector agropecuario, o con centros de investigación y de desarrollo tecnológico, que en general adelanten actividades de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario.

Capacidad Financiera: las entidades deben acreditar la siguiente capacidad financiera:

1. Índice de Liquidez mayor o igual a 1.00 veces. ($\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente}$).
2. Índice de endeudamiento menor o igual al 75.00 %. ($\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}$).

Constitución y situación legal conforme: las entidades que deseen registrarse como EPSEA deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo noveno de la presente Ley.

Requisitos especiales para la habilitación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA): tanto las UMATA como los CPGA, pueden realizar el proceso de habilitación como EPSEA para poder prestar el servicio de extensión agropecuaria en el municipio correspondiente.

Recurso humano, formación profesional experiencia y desarrollo de

competencias: las dos entidades UMATA y CPGA deben contar con un equipo de profesionales que presente los siguientes perfiles:

- ✓ **Director:** un (1) profesional en áreas agropecuarias o profesiones afines con el sector agropecuario, medio ambiental o pesquero con tarjeta profesional vigente; así como experiencia en el sector agropecuario, medio ambiente o pesquero no menor de tres (3) años.
- ✓ **Coordinador de proyectos agropecuarios:** un (1) profesional titulado en alguna de las profesiones de los siguientes núcleos básicos de conocimiento en: agronomía; biología, microbiología y afines; ingeniería agrícola, forestal y afines; administración; economía; ingeniería agroindustrial, alimentos y afines; ingeniería agronómica, pecuaria y afines; medicina veterinaria; zootecnia, con tarjeta profesional vigente (si aplica), con título de posgrado en alguno de los siguientes niveles de formación: especialización universitaria; maestría; doctorado, con experiencia profesional específica de dos (2) años en coordinación, ejecución y supervisión de proyectos agropecuarios, pesquero, acuícola, forestal o desarrollo rural.

Capacidades para ejecutar los Planes Departamentales de Extensión

Agropecuaria (PDEA): se definen como las capacidades humanas técnico-productivas, de mercadeo y comercialización, así como las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, desarrollo empresarial, innovación, investigación y uso de las TIC, gestión sostenible de recursos naturales y desarrollo de habilidades para la participación de los productores en la política pública sectorial, con que debe contar la entidad que pretende habilitarse como EPSEA.

Vínculo comprobable con organizaciones de formación, capacitación, ciencia, tecnología e innovación: las entidades UMATA y CPGA que pretendan habilitarse como EPSEA, deberán cumplir con los mismos requisitos que las entidades privadas y que se relacionaron anteriormente.

Para mayor información sobre requisitos solicitados por la ley pueden dirigirse al enlace, donde encontrarán la normatividad vigente en el sector agropecuario en Colombia.

[Enlace](#)

2.5. Decreto 1319 de 01 de octubre 2020 - Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA)

El Decreto Ley 1319 define la naturaleza, el objeto y la forma de operación del fondo, importante para el entendimiento de la reglamentación referente a la administración de los recursos que beneficiarán los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria.

“El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA) operará como una cuenta, sin personería jurídica, conformado por subcuentas departamentales y/o subsectoriales, adscrito y bajo la administración de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el cual estará destinado a la financiación de la prestación del servicio Público de Extensión Agropecuaria, ejecutado a través de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)”. (Decreto ley 1319 de 2020)

Según reza en el decreto, los recursos del FNEA de acuerdo con lo establecido estarán conformados por:

- Los recursos propios de los entes territoriales.

- Los recursos del presupuesto general de la nación.
- Los recursos de libre inversión del componente de propósito general del sistema general de participaciones.
- Los recursos del sistema general de regalías, de acuerdo con las disposiciones de la comisión rectora y de los órganos colegiados de administración y decisión.
- Los instrumentos financieros creados en el marco del sistema nacional de crédito agropecuario.
- Los recursos de cooperación internacional.
- Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y organismos internacionales, de conformidad con la normatividad vigente.
- Por último, los aportes de las entidades públicas del orden nacional o territorial, de organizaciones internacionales o de entidades privadas, deberán ser únicamente en dinero y consignados en la fiducia dispuesta por la agencia de desarrollo rural, de conformidad con lo previsto en el manual de operación del FNEA.

Para mayor información sobre los lineamientos establecidos en el decreto 1319 de 2020 pueden dirigirse al enlace, donde encontrarán el decreto único del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, relacionado con el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria - FNEA.

[Enlace](#)

2.6. Ley 464 de 29 de diciembre 2017 - Agricultura familiar campesina y comunitaria ACFC

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adopta mediante la resolución 464 de 2017 los lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), en esta normativa se busca mediante la implementación de los lineamientos coadyuvar a la implementación de varios aspectos de la reforma rural integral, para esto plantea como objetivo general de los lineamientos estratégicos de la política pública para la ACFC, planificar y gestionar la acción integral del Estado y orientar la institucionalidad social o privada, dirigida al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial que mejore la sostenibilidad de la producción agropecuaria y que genere bienestar y buen vivir a la población rural. (MADR, 2017).

En el proceso de fortalecer y proteger la ACFC deben socializarse varias definiciones algunas de las cuales son:

- **Agricultura campesina, familiar y comunitaria:** sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación, comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas, silvícolas, entre otros que suelen complementarse con actividades no agropecuarias.
- **Desarrollo rural con enfoque territorial:** es un proceso continuo de transformación, promoción y generación de las condiciones sociales, económicas,

ambientales, culturales e institucionales necesarias para que el territorio rural y sus actores, tanto a nivel individual como colectivo. Despliegan sus capacidades y potencialidades a partir de una visión sistémica, holística, integral y compartida del aprovechamiento sostenible del potencial del territorio, para mejorar su productividad y contribuir al bienestar y buen vivir de los pobladores rurales.

- **Economía campesina, familiar y comunitaria:** sistema de producción, transformación, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, organizado y gestionado por los hombres, mujeres, familias, y comunidades (campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras) que conviven en los territorios rurales del país.
- **Economía solidaria:** sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. (Artículo 2o de la Ley 454 de 1998).
- **Mercados campesinos y comunitarios:** esquemas de comercialización de bienes y servicios agropecuarios a nivel local caracterizados por:
 1. Presencia y gestión, de manera exclusiva o principal, por parte de productores y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria.
 2. Ausencia o mínima intermediación (limitada a algunos productos no disponibles localmente).
 3. Venta de productos frescos, de temporada y procesados; (IV) promoción de alimentos y productos propios del territorio.

4. Búsqueda de un precio justo tanto para el productor como para el consumidor.
5. Fomento de la agricultura limpia o agroecológica.

En esta norma se encuentran los criterios para la caracterización e identificación de la población, como que su actividad económica predominante sea la agropecuaria, uso de mano de obra familiar o comunitaria, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) no debe ser mayor a uno (1) y residir o vivir dentro del perímetro funcional de la finca, o territorio colectivo del cual se derivan sus medios de vida.

El documento adjunto llamado lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria; es donde se direcciona la política de ACFC, en el marco conceptual, diagnóstico de la ACFC, teniendo como base los ejes estructurantes de los lineamientos de política pública ACFC de que trata el artículo 8 de la resolución 464 de 2017.

Para mayor información sobre los lineamientos establecidos en la resolución 464 de 2017 pueden dirigirse al enlace, donde encontrarán la normatividad vigente en el sector agropecuario en Colombia.

[Enlace](#)

3. Diagnóstico Rural Participativo (DRP)

El DRP es una metodología, utilizada para realizar diagnósticos en comunidades rurales. Tiene la característica de ser participativa, esto quiere decir, que en el desarrollo de las técnicas escogidas para la recolección de la información los integrantes de la comunidad intervienen activamente en la construcción de las respuestas y en la toma de decisiones. El DRP da la oportunidad a todos los miembros

de la comunidad a participar en el diagnóstico independientemente de no saber leer y escribir, producto de las herramientas utilizadas (Instituto de Formación Permanente, 2008, Diagnóstico rural participativo y planificación comunitaria).

El DRP es un conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. Esta metodología es versátil y dependiendo de la habilidad del equipo facilitador es posible utilizar la información no solo para identificar las necesidades y problemas de la comunidad en los aspectos técnicos, sociales, ambientales o económicos; sino que puede iniciarse un proceso de identificación de ideas para innovación o procesos de investigación. Su objetivo principal es “apoyar la autodeterminación de la comunidad a través de la participación y así fomentar un desarrollo sostenible.” Expósito, 1999.

Igualmente propone siete pasos que conducen al diseño de la planeación para el diagnóstico, para esto propone establecer un objetivo del diagnóstico, seleccionar y preparar el equipo facilitador, identificar participantes potenciales, identificar las expectativas de los participantes en el DRP, discutir las necesidades de información, seleccionar herramientas de investigación y por último diseñar el proceso de diagnóstico. Expósito, 1999.

Para el trabajo de campo, se exponen tres pasos o momentos iniciales para abordar el trabajo con la comunidad identificada; el primero, la presentación del equipo DRP en la comunidad, segundo el análisis de la situación actual con sus problemas, potencialidades y limitaciones y por último la búsqueda de soluciones haciendo énfasis en problemas y potencialidades. Expósito, 1999.

Paso seguido se muestra una serie de técnicas y herramientas participativas (caja de herramientas) que pueden ser usadas teniendo en cuenta el objetivo planteado, las necesidades de información que haya identificado el equipo facilitador y las características identificadas en la comunidad. Expósito, 1999.

En la etapa final del proceso de diagnóstico llamado análisis, documentación y presentación el autor hace un recorrido por las clases de variables que podemos obtener en este proceso (cualitativas y cuantitativas); recuerda que los documentos obtenidos en los talleres (mapas, registros, fotos, videos, encuestas, etc.) deben tenerse siempre presentes para poder consultarlos nuevamente, con el fin de completar información o de obtener datos que no se identificaron en un primer momento; la elaboración del informe es un paso muy importante porque es en este documento que se consolida las fortalezas, necesidades y problemas que presenta la comunidad; en este momento se convierte en el insumo para el siguiente paso en la formulación de proyectos agropecuarios. Expósito, 1999.

Para mayor información sobre Diagnóstico Rural Participativo consultar.

[Enlace](#)

4. Clasificación y registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, (2019), el registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, se establece como el proceso mediante el cual se caracteriza a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, como factor determinante en la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), de igual forma se utiliza

para la gradualidad en el otorgamiento del subsidio a la tarifa, la focalización y priorización para la prestación del servicio. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

Actores intervinientes: los actores que intervienen en el registro de usuarios son cinco (5):

- **Primer lugar:** se encuentran los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria quienes formarán parte las asociaciones u organizaciones de productores, estas deberán solicitar su inscripción y registro ante el municipio correspondiente al lugar donde se ubiquen los predios.
- **Segundo lugar:** se encuentran las alcaldías municipales y distritales, a través de las secretarías de agricultura o la dependencia que designen, estos velarán por la veracidad de la información depositada en el registro.
- **Tercer lugar:** las gobernaciones departamentales, a través de las secretarías de agricultura o la dependencia que designen, velarán porque los municipios actualicen el registro durante los tres (3) meses de cada año.
- **Cuarto lugar:** se encuentra la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), quien será la encargada de gestionar la articulación de la información de los productores agropecuarios, ya sean desarrollados con recursos públicos o privados, dicha información será utilizada de acuerdo con las normas de Habeas Data. La información reposará en los servidores de la ADR, quien será la encargada de administrar y actuará como responsable en el tratamiento de los datos. De igual forma, la ADR tendrá la facultad de

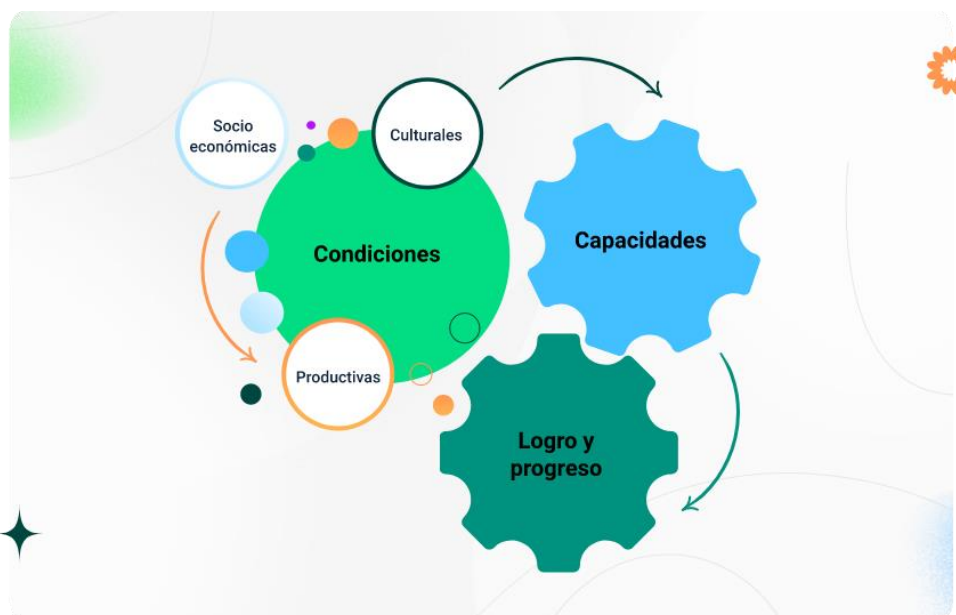
adelantar procesos sancionatorios a través de sus Unidades Técnicas Territoriales (UTT).

- **Quinto lugar:** se encuentra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la cual deberá promover la interoperabilidad de los sistemas de información para incorporar y actualizar la información en el registro de usuarios del servicio de extensión agropecuaria. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

Clasificación de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria: según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, (2019, la clasificación de usuarios de extensión agropecuaria consiste en identificar el nivel en el que se encuentran, por cada uno de los aspectos del enfoque para la prestación de este servicio público, para las diversas actividades productivas. Dicha información obtenida a través de la herramienta dispuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, será el insumo principal para adelantar la clasificación respectiva.

Criterios de calificación: para la calificación de los usuarios del servicio de extensión agropecuaria, está definida en función de la mejora en sus capacidades y condiciones, así como también los logros y progresos frente al enfoque de la prestación del servicio enmarcados en los objetivos propuestos en los PDEA. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

Figura 5. Criterios para la clasificación de usuarios del servicio de extensión agropecuaria.



Nota. MADR – ADR, 2019.

Niveles de clasificación

De acuerdo a los criterios de calificación anteriormente mencionados, se definieron cuatro (4) niveles de clasificación, los cuales se identificarán por cada aspecto del enfoque para la prestación del servicio, para cada usuario de extensión agropecuario. La figura 6, muestra los niveles, donde el 1 corresponde al nivel bajo y el 4 al nivel superior. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

Figura 6. Niveles de clasificación de usuarios.



Nota. MADR – ADR, 2019.

Método de clasificación

Teniendo en cuenta que la clasificación de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria debe definirse para las diferentes actividades productivas, presentadas en la figura 7. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

Figura 7. Actividades productivas y componente ambiental.



Nota. MADR – ADR, 2019

El método de clasificación se enmarca en aplicar una serie de preguntas por cada componente definido (30), de tal modo que permita una calificación del 1 al 4, donde 1 es el escenario básico y 4 el escenario superior o ideal. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

La clasificación de usuarios en el marco de los PDEA

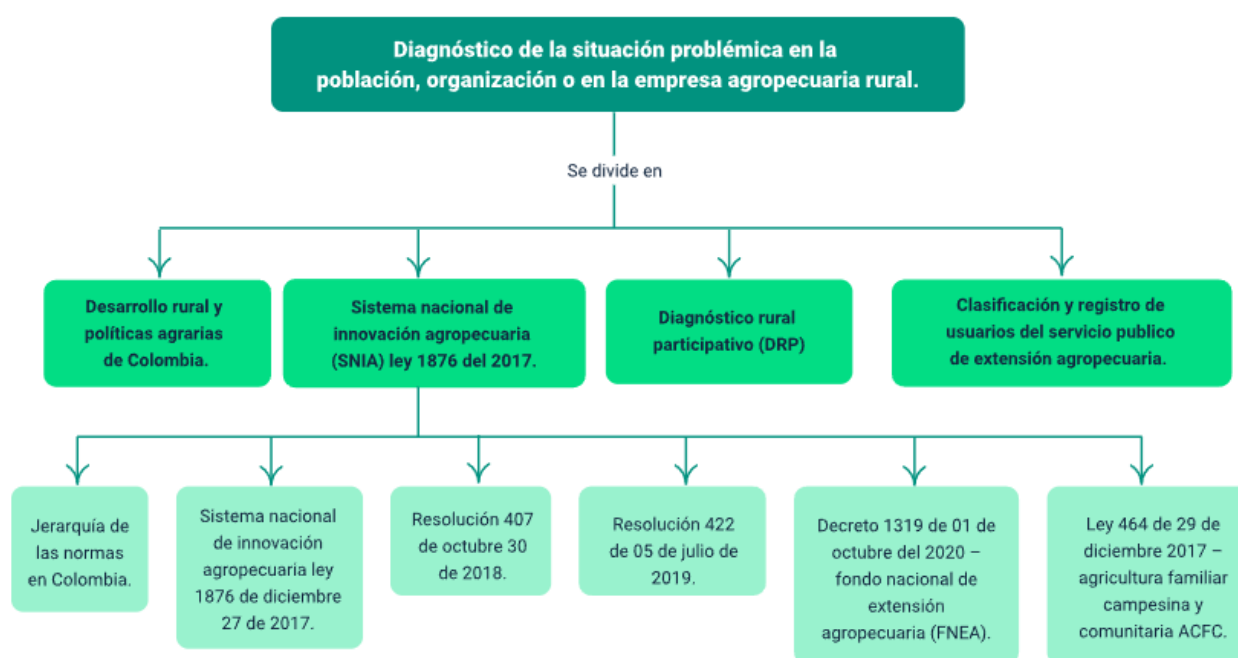
Según el Ministerio de agricultura y desarrollo rural agencia de desarrollo rural, (2019): el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA), es el instrumento de planificación cuatrienal en el cual cada departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, mediante el cual se definirán los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de agricultura y desarrollo rural,

definió los lineamientos para la formulación de los PDEA, donde resaltó la importancia de identificar los niveles donde se encuentran los usuarios de extensión, cuyo resultado permita definir las brechas de productores, sistemas productivos y territorio.

Por último, se ha diseñado una herramienta para el diagnóstico territorial de usuarios, donde se puede detallar el nivel en que se encuentran los usuarios por cada aspecto del enfoque para la prestación del servicio, la media geométrica individual definida por cada aspecto y la meta definida por el territorio. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019).

Síntesis

La historia de las políticas agrarias en Colombia es fundamental para comprender la evolución del sector rural, sus conflictos, desafíos y la forma en que las estrategias del pasado han impactado en el presente. El siguiente diagrama presenta de manera resumida los contenidos de este componente formativo, que busca analizar la evolución histórica de las políticas agrarias colombianas, identificar los patrones recurrentes y aprender de los errores del pasado para diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles que promuevan el desarrollo rural en el país.



Glosario

Agenda Dinámica Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Agropecuaria (Agenda I+D+i): instrumento de planificación y gestión para la focalización de recursos y de acciones de I+D+i tendientes al fortalecimiento, dinamización y optimización del SNIA en torno al mejoramiento de la productividad y competitividad sectorial. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Comunidad Linkata: comunidad temática dirigida a gestionar, divulgar y transferir conocimiento y tecnologías agropecuarias, con el fin de dinamizar y potenciar el relacionamiento entre los resultados del sector generador de I+D y los prestadores de servicios de asistencia técnica, asesoramiento, consultoría y extensión agropecuaria. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Extensión agropecuaria: proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. Por lo tanto, la extensión agropecuaria facilita la gestión de conocimiento, el diagnóstico y la solución de problemas, en los niveles de la producción primaria, la poscosecha y la comercialización; el intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales, colectivas y sociales. Para tal efecto, la extensión agropecuaria desarrollará actividades vinculadas a promover el cambio técnico en los diferentes eslabones que constituyen la cadena productiva, la asesoría y acompañamientos a productores en acceso al crédito, formalización de la propiedad, certificación en BPA, entre otros. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Innovación abierta o colaborativa: se refiere al proceso de concepción y desarrollo de una innovación que ocurre en un marco de colaboración entre diversos actores o agentes, de modo que la innovación resulta altamente cohesionada con el entorno en el que se produce y por ende cuenta con una mayor probabilidad de adopción y éxito. Además, permite reconocer los conocimientos, capacidades y experiencias de los actores y agentes que intervienen en la innovación. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Innovación agropecuaria: introducción de productos, bienes, servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo, de transformación o adecuación de la producción, administrativo, organizacional, financiero y crediticio, informático, de mercadeo y comercialización, que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector agropecuario. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Ordenamiento productivo y social del territorio: proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, que permite la armonización de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, privilegiando el adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, la adecuación y transformación de la producción), el uso eficiente del suelo y la sostenibilidad social, ambiental y económica, orientado al logro de la competitividad sectorial. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Organización Comunitaria: todos aquellos productores agropecuarios organizados de forma asociativa, cooperativa, solidaria u otras formas de organización. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación Agropecuarias (PCTIA): zonas geográficas especiales destinadas a promover la innovación agropecuaria basada en el

conocimiento científico y tecnológico y a contribuir a la productividad empresarial y la competitividad regional. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA): herramienta de planificación que define los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción en materia de ciencia, tecnología e innovación sectorial para aumentar la competitividad, sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Se fórmula para un período de 10 años. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA): instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia de un departamento y sus municipios. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Plataforma siembra: es el aplicativo electrónico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinado a la recopilación, gestión, divulgación y seguimiento de la información de los proyectos, resultados, avances y oferta tecnológica sectorial originada en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA). (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Redes de innovación: conjunto de actores que interactúan a través del intercambio de conocimientos con el fin de compartir información, conceptos, aplicaciones, metodologías, experiencias y prácticas de trabajo. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Ruralidad: es el conjunto de interacciones sociales, económicas y culturales que se surten en espacios de baja e intermedia densidad poblacional y cuyas actividades

económicas preponderantes están estrechamente relacionadas con el medio natural y sus encadenamientos productivos. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Sector agropecuario: se entiende por sector agropecuario cuya actividad económica está circunscrita a los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, así como la adecuación y la transformación de la producción, los servicios de apoyo asociados y la comercialización de productos primarios. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Sistemas Territoriales de Innovación Agropecuaria: los Sistemas Territoriales de Innovación (STI) son entendidos como sistemas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos de actores tanto públicos como privados, que articulados en redes de conocimiento tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen en un territorio particular establecido a partir del reconocimiento de interacciones específicas entre sus dimensiones biofísicas, culturales, institucionales, socioeconómicas, entre otras. Los STI son espacios prácticos en los cuales los procesos de investigación, formación de capacidades de aprendizaje interactivo, así como de transferencia de tecnología y extensión, establecen dinámicas conjuntas de articulación institucional que concretan, impulsan y consolidan los procesos de ciencia, tecnología e innovación en los territorios. (Congreso de Colombia. (2017). Ley 1876 del 29 de diciembre).

Material complementario

Tema	Referencia APA del Material	Tipo de material	Enlace del recurso
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).	Agencia de desarrollo rural, (2019). Resolución 0422 de 2019.	Resolución	https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/Resoluci%C3%B3n%200422%20del%2005-07-2019.pdf
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).	Presidencia de la república, (2020). Decreto 1319 de 2020.	Decreto	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=142845
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).	Ministerio de agricultura y desarrollo rural, (2017). Resolución 0464 de 2017.	Resolución	https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000464%20de%202017.pdf
Diagnóstico Rural Participativo (DRP).	Expósito, (2003) Diagnóstico rural participativo.	Diagnóstico	https://www.corporacionpba.org/irp/heramientas/Etapa_I/punto_de_partida/paso2_drp/Diagnostico_Rural_Participativo.pdf

Referencias bibliográficas

Arango, R. M., (1987). Esquema de políticas de reforma agraria en Colombia. Lecturas de Economía, No.23, p. 197-220.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/7778/7344>

Berry, A. 2002. ¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione? Revista de Economía Institucional. 4, 6 (feb. 2002), 24–70.
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/240/224>

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucional.
<https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/agraria/politica-agraria-tierras.pdf>

Congreso de Colombia, 2017. Ley 1876 del 29 de Diciembre.
<https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Leyes/381683:Ley-1876-de-diciembre-29-de-2017>

Decreto 1319 de 2020. [Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural]. Por la cual se adiciona el Título 5 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria - FNEA. Octubre 1 de 2020.

Expósito V, M, 1999. Diagnóstico Rural Participativo, una guía práctica. Santo Domingo. Centro Cultural Poveda. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/CLACSO/7543/diagrural.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fernández L., M. I. Fernández e I. Soloaga, “Enfoque territorial y análisis dinámico de la ruralidad: alcances y límites para el diseño de políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina y el Caribe”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/65, LC/MEX/TS.2019/16), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/8a34171e-fe47-468f-afff-3404b329ad1f/content>

Ley 1876 de 2017. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. Diciembre 29 de 2017. DO. N° 50.461.

<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034416>

Machado, A. 2009. La Reforma rural, una deuda social y política. Universidad Nacional de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2019. Clasificación y Registro de Usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, 2018.

https://fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/catalogo/Libros_Digitalizados/O_reforma-rural.pdf

Resolución 407 de 2018. [Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural]. Por la cual se reglamenta las materias técnicas del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria - SNIA. Octubre 30 de 2018.

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=154584&dt=S>

Resolución 422 de 2019. [Agencia de Desarrollo Rural]. Por la cual se reglamenta el artículo 33 de la Ley 187 de 2017. Julio 5 de 2019.

<https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/Resoluci%C3%B3n%20422%20del%2005-07-2019.pdf>

Resolución 464 de 2017. [Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural]. Por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de la política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Diciembre 29 de 2017.

https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/35667/Ver_Documento_35667.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sierra, P. H. (1998). Concepto y tipos de ley en la constitución colombiana. Universidad Externado de Colombia.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable del equipo	Dirección general
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de línea de producción	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Roberto Augusto Bernal Duque	Experto temático	Centro de desarrollo agroempresarial - Regional Cundinamarca
Yeison Farid Méndez Ortiz	Experto temático	Centro agropecuario “La Granja” – Regional Tolima.
Orlando Barón Méndez	Experto temático	Centro de desarrollo agroempresarial - Regional Cundinamarca
Paula Andrea Taborda Ortiz	Diseñadora instruccional	Centro de diseño y metrología – Regional Distrito Capital
Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda	Diseñadora instruccional	Centro para la industria de la comunicación gráfica
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor pedagógico	Centro industrial del diseño y la manufactura – Regional Santander

Fabian Cuartas Donado	Evaluador instruccional	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Carmen Alicia Martínez Torres	Diseño web	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Jorge Leonardo Camacho Pardo	Desarrollo full stack	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Eulises Orduz Amézquita	Actividad didáctica	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Carmen Alicia Martínez Torres	Productor audiovisual	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Productor audiovisual	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Carolina Coca Salazar	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico

Luz Karime Amaya Cabra	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Juan Carlos Cardona Acosta	Validador de recursos digitales	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico
Jairo Luis Valencia Ebratt	Validador de recursos digitales	Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial Sabanalarga - Regional Atlántico